



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)

Medio de control: Ejecutivo
Radicado: 15001 33 33 013 **2019 00274 00**
Demandante: Edilma Ducón Agudelo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago promovido por la señora Edilma Ducón Agudelo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

La parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a favor de Edilma Ducón Agudelo, por los siguientes conceptos¹:

*“1. Por la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$4.215.585)**, POR CONCEPTO DE LA DIFERENCIA DE LAS **MESADAS PENSIONALES** COMO CAPITAL DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA (S) SENTENCIA (S) QUE SIRVEN COMO TÍTULO EJECUTIVO.*

*2. Por la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$3.429.950)**, POR CONCEPTO DE LOS INTERESES MORATORIOS CAUSADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA EJECUTORIA (28 DE JULIO DE 2016) HASTA EL DÍA DEL PAGO PARCIAL (FEBRERO DE 2018).*

*3. Por la suma de **DOS MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS (\$2.026.221)**, POR CONCEPTO DE LOS INTERESES MORATORIOS CAUSADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL PAGO PARCIAL (MARZO DE 2018) HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.*

4. Por el valor de los intereses moratorios que se causen sobre la suma relacionada en el numeral primero desde el día de presentación de la demanda hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación.

5. Se condene en Costas y Agencias en Derecho a la parte demandada, del presente proceso ejecutivo.”

¹ F.1

La demanda fue repartida inicialmente ante el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, quien, mediante auto de 23 de enero de 2020 (f. 37) dispuso su remisión por competencia ante este Despacho judicial, por haber proferido la sentencia que sirve de título para la presente ejecución.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6.º y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de la condena contenida en sentencia de 12 de julio de 2016 (fs. 15 a 24), proferida por este Despacho judicial en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2015 00162 00, y que cobró ejecutoria el 27 de julio de 2016 (f. 25). De otro lado, en virtud del numeral 7.º del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigente (fs. 2 y 3).

- Caducidad

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde, de conformidad con lo señalado en el literal k numeral 2.º del artículo 164 del CPACA, por cuanto la sentencia cobro ejecutoria el **27 de julio de 2016** (f. 25), y una vez transcurrieron los diez (10) meses de que trata el artículo 195 del CPACA, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **18 de diciembre de 2019 (f. 35)**.

- Del título ejecutivo

En los términos del artículo 297 del CPACA constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

***1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
(...)”***

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de

costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado señaló que el artículo 488 del CPC (hoy artículo 422 del CGP) estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido que los documentos integrantes del título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.²

Bajo las anteriores precisiones, cuando la obligación proviene de una sentencia judicial debe integrarse el título ejecutivo complejo con la copia de la respectiva providencia judicial y su constancia de ejecutoria, así como aquellos documentos que contengan la obligación clara, expresa y exigible. Cuando se ejecuta, entonces, con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencie la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago.

En este caso, tenemos que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 12 de julio de 2016, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2015 00162 00 (fs. 15 a 24) la cual cobró ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 p. m.) del 27 de junio de 2016, según constancia secretarial (f. 25), y que indica que todos los documentos son copias auténticas.

También conforman el título ejecutivo complejo, los siguientes documentos:

- Copia de la Resolución N° 1088 de 12 de octubre de 2004 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de invalidez (fs. 6 y 7).
- Copia de la Resolución N° 0648 de 30 de mayo de 2006 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se revisó una pensión de invalidez (fs. 8 y 9).
- Copia del certificado de factores salariales para los años 2003 y 2004 (fs. 12 y 13).

² Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

- Copia de la solicitud de cumplimiento de la sentencia de 25 de agosto de 2016 elevada por el demandante, por intermedio de su apoderado judicial (fs. 26 y 27).
- Copia de la Resolución N° 009418 de 19 de diciembre de 2016 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se ajustó una pensión de invalidez en cumplimiento de una sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja (fs. 28 a 31).

De lo anterior, se puede extraer que el título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, de conformidad con el artículo 297 numeral 1.° de la Ley 1437 de 2011, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que la entidad llamada a responder es la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

Respecto al requisito de **claridad** de la obligación exigido por el artículo 422 del CGP, es pertinente advertir que una obligación es ejecutivamente clara, porque en el documento constan todos los elementos que la conforman o le dan entidad, es decir, se conoce quién es el deudor, quién el acreedor y lo debido, esto es, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama; se trata de una obligación **expresa**, o sea enunciada de modo inconfundible, en el documento que sirve de título, y **exigible**, porque no está sujeta a plazo o condición, lo que permite reclamar su cumplimiento.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor de la ejecutante y a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, originada en la sentencia emitida primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3331 004 2015 00162 00, en el siguiente sentido:

*“**CUARTO.** Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordena al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio liquidar en debida forma, reconocer y pagar a la señora **EDILMA DUCON AGUDELO** el valor de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de todos los salarios devengados durante el último año de prestación de servicios, esto es desde el **13 de agosto de 2003 al 13 de agosto de 2004**. Es decir que al factor salarial ya reconocido– Asignación básica, se deberá adicionar el factor de **prima de navidad, prima de vacaciones y prima de grado**. La liquidación de la pensión surtirá efectos fiscales a partir del 13 de agosto de 2004, fecha en la que adquirió el estatus pensional, no obstante las diferencias reconocidas solo se harán efectivas desde*

el 2 de septiembre de 2012, por prescripción trienal, comoquiera que la demanda fue radicada el 2 de septiembre de 2015.

Las sumas que resulten en favor de la parte actora, se ajustarán en su valor, dando aplicación a la siguiente fórmula:

$$R = Rh \times \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el valor correspondiente a la mesada pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

QUINTO.- Al momento de hacer la liquidación para pagar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido. Igualmente, se harán los descuentos que por aportes se deban realizar, conforme a la parte motiva de la sentencia, valores que serán actualizados a valor presente a través del ejercicio que realice un actuario de manera que se obtenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador y a la actora pudiendo repetir contra el primero para obtener su pago y determinando el valor a descontar de la pensión de la segunda.”

De lo anterior, se advierte que en la sentencia se imputa a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio una obligación clara y expresa, ya que la referida sentencia aunque fue proferida en abstracto, es liquidable mediante una operación matemática.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación en los términos del artículo 192 del CPACA, el cual prevé que las condenas a entidades estatales serán cumplidas en un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. En este orden y comoquiera que la decisión en mención cobró ejecutoria el 27 de julio de 2016 (f. 25), los diez (10) meses de que trata la norma en mención se cumplieron el 27 de mayo de 2017. Por tanto, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 18 de diciembre de 2019 (f. 35) este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción. Estas razones llevan a colegir que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente.

Corolario de lo expuesto, considera este Juzgado que de los documentos aportados como base de la presente ejecución, es posible predicar su idoneidad como título ejecutivo, toda vez que reúnen las exigencias contempladas en el artículo 422 del CGP, siendo procedente librar el mandamiento de pago solicitado, en tanto que los documentos anexados para el cobro judicial no dejan duda en el juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad.

Del mandamiento de pago

En este contexto, el artículo 430 del Código General del Proceso establece al respecto:

"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal..."

Conforme a la redacción de la norma, el juez debe librar el mandamiento de pago, cuando se acompañe con la demanda, el documento idóneo completo que sirva de fundamento para la ejecución. En ese orden de ideas, se librará el mandamiento de pago, según lo sostenido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respecto a las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva, en los siguientes términos:

"En otras palabras, frente a la demanda ejecutiva el juez tiene tres opciones:

1) Librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo.

2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó el título.

*3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales (art. 489 C. de P.C.), las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista el título ejecutivo, o negarlo en caso contrario."*³

Ahora bien, a efecto de establecer si las sumas señaladas como pretensiones en la demanda, corresponden a los montos adeudados por la entidad respecto a los cuales es procedente librar mandamiento de pago a favor de la señora Edilma Ducón Agudelo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atendiendo la condena impuesta en la sentencia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 33-33-004-2015-00162-00, el Despacho procede a realizar el estudio de los montos reclamados en los siguientes términos:

Como consideración previa, se tendrá que la ejecutante no discute la reliquidación hecha por la entidad demandada en la Resolución 009418 de 19 diciembre de 2016,

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13103.

sino que reclama el pago de dineros adeudados por concepto de capital, indexación e los intereses moratorios, causados entre el 2 septiembre de 2012 y el 27 de julio de 2016; los intereses moratorios generados sobre el saldo de capital adeudado hasta cuando se realice el pago total de la obligación.

Ahora bien, la sentencia de 12 de julio de 2016 ordenó ajustar la pensión del accionante incluyendo los factores devengados en el año de consolidación del status, es decir, el período comprendido entre el 13 de agosto de 2003 y el 12 de agosto de 2004, de tal manera que a los factores ya reconocidos se adicionará la prima de navidad, prima de vacaciones y prima de grado, a partir del 02 de septiembre de 2012 por efectos de la prescripción declarada en la providencia.

Revisado el acto administrativo con el que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ajustó a derecho la mesada pensional del accionante - **Resolución N° 009418 de 19 diciembre de 2016** - (fs. 28 a 31), se observa la liquidación correspondiente, en la que se tuvieron en cuenta como factores salariales, los siguientes:

FACTORES SALARIALES	VALOR
Asignación Básica	\$1.718.727
Prima de navidad	\$145.429
Prima de vacaciones	\$69.540
Ingreso Base de Liquidación	\$1.933.696
IBL 75%	\$1.450.272

De acuerdo a lo anterior, calculó la mesada reliquidada efectiva a partir del 02 de septiembre de 2012, en la suma de \$ 1.450.272. En igual sentido, en virtud de los efectos otorgados por la providencia objeto de recaudo, se reconoció por concepto de mesadas atrasadas, por la diferencia entre el valor de la mesada pagada y el valor de la nueva mesada, el valor de \$12.178.704 desde el 02 de septiembre de 2012 al 14 de noviembre de 2016, fecha en la que la entidad ejecutada realizó la liquidación de lo ordenado en el fallo. Por conceptos de indexación desde el 02 de septiembre de 2012 al 27 de julio de 2016, la suma de \$1.212.364 y por intereses moratorios desde el 27 de julio y el 30 de noviembre de 2016, el valor de \$973.555.

En la demanda se cuestionó esa liquidación al señalar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagó un valor inferior al que debía ser cancelado, por lo que se tiene un pago parcial de la obligación, así:

Diferencia mesadas	\$16.394.289
Intereses moratorios	\$4.403.505
Indexación	\$1.184.121
Descuentos por salud	\$-1.967.315
Costas y agencias en derecho	\$0
Subtotal liquidación	\$20.014.601
Pago parcial	\$12.903.179
TOTAL A FEBRERO DE 2018	\$7.111.422

Asimismo, señaló que se le adeudan los intereses moratorios generados desde el día siguiente al pago parcial de la obligación y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago total por un valor de \$2.026.221 (calculado a la fecha de presentación de la demanda).

De acuerdo a las órdenes impartidas en el título, que fueron descritas con antelación, el Despacho considera que no le asiste razón a la parte demandante, por cuanto no discriminó en su liquidación los intereses moratorios a la tasa DTF y a la tasa comercial, atendiendo a los plazos establecidos en el artículo 195 del CPACA. Así las cosas, no hay lugar a librar el mandamiento de pago conforme a lo solicitado por el demandante; no obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 430 del Código General del Proceso, el juez librará mandamiento ejecutivo en la forma que lo considere legal.

En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá indicó que *“la función del operador jurídico se extiende a analizar el control de legalidad de la petición, máxime si la sentencia objeto de ejecución contiene una condena en abstracto.”* Advirtiendo, además, que los procesos ejecutivos adelantados ante esta jurisdicción no sólo buscan garantizar el pago de una acreencia, también deben propender por la protección del erario a través de un control estricto que impida el menoscabo injustificado de aquel.⁴

Con apoyo de la contadora adscrita a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Boyacá, se realizó la revisión contable y liquidación financiera de las sumas que provienen del título judicial objeto de recaudo, y, en consecuencia, de la liquidación que se anexa y que forma parte integral de la presente providencia, se extrae lo siguiente:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN A 28/02/2018 FECHA DE PAGO	LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA	VALORES RECONOCIDOS POR FOMAG E INDICADOS EN LA DEMANDA	DIFERENCIA
DIFERENCIA EN MESADAS	\$16.566.738	\$12.178.704	\$4.388.034
(-) DESCUENTOS DE SALUD	\$(1.988.009)	\$(1.461.444)	\$(13.316)
(+) INDEXACION	\$1.253.157	\$1.212.364	\$40.793
TOTAL CAPITAL A 31/07/2017 (mes hasta donde se causaron diferencias)	\$15.831.887	\$11.929.624	\$4.415.512
TOTAL INTERE DTF Y MORATORIO DESDE EL 28/07/2016 HASTA EL 28/02/2018	\$3.811.894	\$973.555	\$2.838.339
TOTAL LIQUIDACION DEL CREDITO	\$19.643.781	\$12.903.179	\$7.253.851

Ahora, teniendo en cuenta que existe un saldo de capital —\$7.253.851—, es evidente que este continuó generando intereses moratorios al 1.5 de la tasa comercial desde la fecha de pago parcial y los causará hasta la fecha del pago total de la obligación. Los cuales a la fecha de la presentación de la demanda corresponden a la suma de \$2.053.949. Por consiguiente, las sumas por las que se librará mandamiento de pago son las siguientes:

⁴ Providencia de 26 de abril de 2018, Radicación: 15001-3333-006-2016-00029-01, MP Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

RESUMEN DE LIQUIDACION A 18/12/2019	
SALDO CAPITAL A 28/02/2018 (Pago parcial)	\$4.415.512
SALDO INTERES DTF Y MORATORIO DESDE EL 28/07/2016 HASTA EL 28/02/2018	\$2.838.339
INTERES MORATORIO DESDE EL 01/03/2018 HASTA EL 18/12/2019	\$2.053.949
TOTAL A 18/12/2019	\$9.307.800

- **De la solicitud de medida cautelar**

La parte demandante solicitó que se ordene el embargo y retención de dineros que la Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con NIT No 860525148-5, posee en el Banco BBVA – Sucursal Bogotá D.C. Por lo tanto, de manera previa a resolver sobre dicha medida, y en aplicación del párrafo del artículo 594 del CGP⁵, el Despacho solicitará a la(s) entidad(es) bancaria(s) en mención que certifique(n) la existencia de productos financieros a nombre de la demandada, y en la que conste número(s) de cuenta(s); si se trata de cuenta(s) activa(s) y el saldo actual, así como su naturaleza referente a la procedencia y destinación de los dineros allí depositados. De acuerdo con lo anterior, se oficiará a la(s) entidad(es) bancaria(s) señalada(s) por el ejecutante, con el fin que obtener la información en mención.

Por tratarse de un proceso híbrido, dentro de la carpeta del proceso ubicada en el estante electrónico del Juzgado, Secretaría creará una subcarpeta que albergue separadamente las medidas cautelares.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Librar mandamiento de pago a favor de la señora Edilma Ducón Agudelo, y en contra de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las siguientes sumas de dinero:

1. Por la suma de **cuatro millones cuatrocientos quince mil quinientos doce pesos (\$ 4.415.512) M/Cte.**, por concepto de saldo de capital —diferencias de mesadas e indexación— ordenados en la sentencia proferida por este Juzgado el día 12 de julio de 2016, dentro del proceso radicado No. 15001 33 31 004 2015 00162 00.
2. Por la suma de **dos millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos (\$2.838.339)** por concepto de intereses moratorios generados desde 28 de julio de 2016, —fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta 28 de febrero de 2018, —día del pago parcial efectuado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio—

⁵ “Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables”

3. Por la suma de cuatro millones **dos millones cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos (\$2.053.949)** por concepto de intereses moratorios causados desde el día siguiente al pago parcial —1.º de marzo de 2018, hasta la fecha de presentación de la demanda —18 de diciembre de 2019, y los que continúen generando hasta la fecha en que se produzca el pago total de la obligación.

SEGUNDO.- Notificar personalmente esta providencia al representante legal de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto. Se anexará copia digitalizada de la demanda y de sus anexos, asimismo, de esta providencia.

TERCERO.- Notificar esta providencia a la parte demandante y a su apoderado(a), de conformidad con el artículo 201 del CPACA.

CUARTO.- Advertir a la parte demandada que dispone del término de cinco (5) días para que efectúe el pago de la obligación, según lo establecido en el artículo 431 del CGP, y de diez (10) días para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 *ibídem*. Dichos términos comenzarán a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación prevista en el art. 199 del CPACA.

QUINTO.- Reconocer personería al abogado Henry Orlando Palacios Espitia, identificado con C.C. 7.160.575 y T.P. 83.363 del C. S. de la J., para actuar como apoderado de la ejecutante, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 5 del expediente.

SEXTO.- Los apoderados y demás sujetos del proceso, en adelante y durante la vigencia del Decreto 806 de 2020, deberán hacer uso de los medios tecnológicos y virtuales. Por lo tanto, deberán enviar a través de los canales digitales informados por las partes un ejemplar de todos los memoriales en formato PDF o de las actuaciones que realicen de manera simultánea con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.

Los memoriales y actuaciones dirigidos al Despacho se remitirán al buzón del correo electrónico: correspondenciajadmtn@cendoj.ramajudicial.gov.co

SÉPTIMO.- Por Secretaría, de manera previa a resolver la petición de medida cautelar, **oficiar** al Banco BBVA – Sucursal Bogotá D.C., para que dentro del término de diez (10) días, a partir del recibo de la comunicación respectiva, se sirva(n) certificar la existencia de productos financieros de los cuales sea titular Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con NIT No 860525148-5, o aquel que corresponda con la entidad ejecutada. Adicionalmente, hará(n) constar el número y clase de cuenta o producto, denominación, estado actual, fecha de última actividad y saldo. Por último, de ser posible, señalará(n) el origen y destinación de los recursos manejados en dichos

productos financieros. Se **advertirá** a la(s) entidad(es) requerida(s) que de no suministrar la información de manera oportuna, podrán ser sancionadas, según lo expuesto en el artículo 44 del CGP.

Por tratarse de un proceso híbrido, dentro de la carpeta del proceso ubicada en el estante electrónico del Juzgado, **crear** una subcarpeta que albergue de manera separada las medidas cautelares.

OCTAVO.- La parte ejecutante deberá remitir el(los) oficio(s) elaborado(s) por Secretaría a la(s) entidad(es) requerida(s), dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del presente auto. Durante el mismo término, deberá acreditar su remisión o radicación para que obre en el expediente.

Notifíquese⁶ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

1d6d3bd2db31a3142d75fcea560a7cdb01fc87ba628bbc666ea3c22526e83709

Documento generado en 08/10/2020 04:44:48 p.m.

6

